



EXPRESO AGRAVIOS.

Sr. Juez Civil en Documentos y Locaciones IIa. Nominación:

Juicio: "Superintendencia de Riesgos de Trabajo vs. Ruiú, Carmen Teresa s/Cobro Ejecutivo. Expte. N° 552/17."

CARMEN TERESA RUIU, demandada, en los autos del rubro a V. S. y por su intermedio a la Excma. Cámara del Fuero con el debido respeto digo:

I.- En legal forma y tiempo oportuno vengo a expresar los agravios que la sentencia en crisis me ocasiona, pidiendo desde ya que, por las razones de hecho y de derecho que haré valer en el presente escrito, oportunamente se revoque la misma, acogiendo con costas la defensa de prescripción.

II.- La sentencia se fundamenta en la primera parte del art. 2532 del CCCN, y equivoca.

Por ser ley posterior a la citada en el fallo, prima el Código Civil y Comercial, cuyo art. 2560 dispone que el plazo genérico (y máximo) es de cinco años.

La interpretación antojadiza de la norma, vertida por el ejecutante y aprehendida en la sentencia, encuentra su valladar en el art. 2537, que dispone:

“ARTICULO 2537.-Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior.

Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior."

Las legislaciones, por cierto, podrán establecer períodos de prescripción diferentes a la legislada en el orden nacional, excepción que rige para futuro, por normas posteriores a la fecha de la sanción del CCCN.

Igualmente la legislación especial, para aplicar prescripciones diferentes, debe promulgar la ley respectiva.

Mientras no lo haga, la prescripción liberatoria opera a los cinco años.

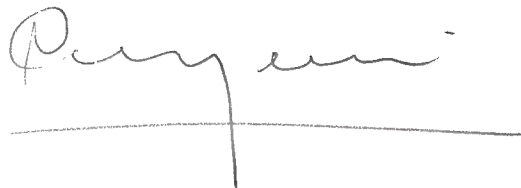
III.- Lo brevemente expuesto amerita que al resolver, la Excm. Cámara revoque la resolución impugnada, haciendo lugar a la defensa de prescripción con costas.

Ello así por cuanto conforme monocrorde jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, todos los aspectos del instituto de la prescripción deben regirse por las disposiciones del CCCN, conforme art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional.



ENRIQUE E. KAENEL
ABOGADO
C.A.T. Nº 1.754 - CAS 175
Just. Federal T 93 F. 386

JUSTICIA.



JUZ.DOC.Y LOC.II

LU, 02 JUL 2018 08:27

Adjunta copia p/emplado 0172

DR. MARCELO A. NOJAS
SECRETARIO
JUZGADO DOC. y LOC. 2a. NOM.
O JUDICIAL CONCEPCION




JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU
CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO Expt 552/17.-

CONCEPCION, 3 de julio de 2018.

De la expresión de agravios presentada, córrase
traslado a la contraparte por el término de ley.- PERSONAL.-

JPV.-


DR. JORGE H. JAKOBSEN
JUEZ
JUZA. DOC. Y LOC. 2da. NOM-
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

En 05 JUL 2018

Se libran: Cédulas / Oficios / Mandamientos. 679 (62/18)

Dr. GARCIA A. ROJAS
SECRETARIO
LIC. 2a NOM.



PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN

CEDULA DE NOTIFICACION
JUZGADO DE DOCUMENTOS Y LOCACIONES SEGUNDA NOM.

Concepción 3 de julio de 2018

CEDULA Nº 694

AUTOS: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU
CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO. Expte Nº: 552/17

Se notifica: AL APODERADO DEL ACTOR DR. FERNANDO NAZUR
Domicilio: CASILLERONº 459.-



PROVEIDO

CONCEPCION, 3 de julio de 2018. De la expresión de agravios presentada,
córrase traslado a la contraparte por el término de ley.- PERSONAL.-Fdo: JORGE
H. JAKOBSEN "Juez".- **QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.**- MPM



C/6º 15

Dr. MAYIAS A. NOJAS
SECRETARIO
JUZGADO DOC. y LOC. 2a. NOM.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION



JUZ.DOC.Y LOC.II

VI. 06 JUL 2018 10:48

DR. GILBERTO A. ROJAS
SECRETARIO
JUZGADO DOC. y LOC. 2a NOM.
CENTRO JUDICIAL COAHUILA



CONTESTA TRASLADO

JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c. RUIU, CARMEN TERESA s/COBRO EJECUTIVO. Expte. n° 552/17.

Señor Juez Civil en Documentos y Locaciones de la IIª Nominación

Fernando J. Nazur, por la representación que ejerzo de **la actora**, a V.S. digo:

I. OBJETO

En tiempo y forma, contesto el traslado ordenado por providencia de fecha 03.7.2018, notificada mediante cédula n° 694, extraída del casillero de notificaciones constituido como domicilio *ad litem* el 06.7.2018.


Por las razones que expondré, solicito desde ya el rechazo del recurso de apelación concedido a la accionada, con costas.

II. ANTECEDENTES RELEVANTES

1. En autos tramita la ejecución de las denominadas “cuotas omitidas”, es decir, aquéllas que según el régimen de riesgos del trabajo (ley 24.557, sus modificaciones y reglamentaciones), hubiera debido pagar el empleador desde el inicio de vigencia de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (01.7.1996) o al comienzo de su actividad si ésta hubiera ocurrido con posterioridad, hasta la suscripción del contrato con una Aseguradora.

Es decir, el devengamiento del crédito reclamado en autos tiene su origen y fundamento en el incumplimiento del demandado, en su condición de empleador, de mantener contrato vigente con una aseguradora de riesgos del trabajo, durante todo el tiempo que esa inexistencia de cobertura de riesgos se mantuviera.

2. Intimada de pago y citada de remate, la demandada opuso al progreso de la ejecución, la defensa de prescripción liberatoria, fundándola en lo normado en el inc. c) del art. 2.562 del Código Civil y Comercial de la Nación.


FERNANDO J. NAZUR
AB. 3. AD. 2
M. 0418 - L. 1 - F. 202
M. FEDERAL T. 96 - F. 360
C.A.S. M. 250 - L. 01 - F. 07

3. Al contestar el traslado de la excepción articulada, mi mandante remarcó que la norma invocada por la excepcionante **no** regía el caso de autos, por la existencia de una norma especial, la del inc. 2º del art. 44 de la ley 24.557, que establece un plazo de prescripción decenal y excluye la aplicación de una disposición de carácter general, como la del Código Civil y Comercial de la Nación. Por ello, debido a que no había transcurrido hasta la interposición de la demanda el plazo establecido en la ley especial, solicitó el rechazo de la articulación.

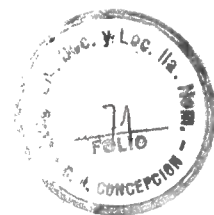
4. En la sentencia apelada, la Juzgadora destacó que la cuestión a dirimir consistía, precisamente, en la determinación de la ley aplicable. En tal sentido, señaló que a su criterio, la solución la proporcionaba el art. 2.532 del Código Civil y Comercial, al establecer que, **“en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria”**. De allí que, a criterio de la Sentenciante, **cuando existe una ley especial que contiene pautas para el cómputo de los plazos de prescripción, referidas a la relación jurídica de la que se trate, en primer término se aplican ellas y las reglas establecidas en este Código operan sólo en ausencia de previsión normativa específica**. Por ello entendió aplicable al *sub judice* el art. 44 inc. 2º) de la ley 24.557, en tanto ley especial que establece un plazo de prescripción decenal, para reclamar el pago de las acreencias de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión del sistema de riesgos del trabajo.

En ello fundamentó el rechazo de la defensa de prescripción deducida por la ejecutada, al no haber transcurrido el plazo decenal respecto de ninguno de los períodos incluidos en el certificado de deuda en ejecución.

III. SE DECLARE DESIERTO EL RECURSO

Una simple y rápida lectura de la pieza de la que se me corre traslado permite advertir que la apelante **no ha expresado agravios en la forma prescripta por el art. 717 de la ley de rito**. Es decir, su llamada expresión de agravios **no contiene la crítica concreta y razonada** de los puntos de la sentencia que estima afectan sus derechos.

Contrariamente, la recurrente no se hace cargo de los sólidos fundamentos de la sentencia que apela, pretendiendo su revocación sobre la base de una irrazonable hermenéutica de las disposiciones del Código Civil y Comercial Común, que la resolución en crisis declaró inaplicable, sin detenerse por un momento a cuestionar esa inapli-



cabilidad o, siquiera, a explicar cuál es el yerro de la sentenciante ni por qué, a su criterio, la cuestión de marras no se rige por las disposiciones de la ley especial y sí por las generales del Código Civil y Comercial.

En consecuencia, **al no haberse expresado agravios en la forma que prescribe el ordenamiento procesal, corresponde se declare desierto el recurso de apelación concedido a la parte demandada, por aplicación de lo dispuesto en el art. 718, C.P.C.**

IV. EN SUBSIDIO, CONTESTO AGRAVIOS

Par el hipotético e improbable evento de que se entendiera que la apelante expresó agravios en legal forma, los contesto a continuación en forma subsidiaria, demostrando además su absoluta improcedencia.

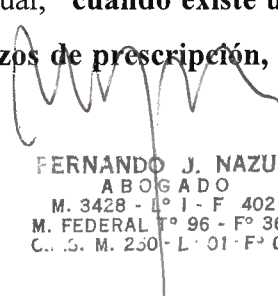
1. En primer lugar, no resiste el análisis el argumento de que por ser posterior, las disposiciones del Código Civil y Comercial derogan las anteriormente vigentes, aún cuando ellas hubieran estado establecidas en leyes especiales, que configuran sistemas independientes que no estaban regulados por la ley anterior.

En efecto, **la ley de Riesgos del Trabajo 24.557 no ha sido derogada, ni por el Código Civil y Comercial Común ni por ningún otro texto legal, ni en forma expresa ni implícitamente.**

En este sentido, se ha señalado que **las disposiciones del Código Civil y Comercial resultan aplicables cuando se deben resolver “los casos civiles y comerciales a nivel general”** (Marisa Herrera y Gustavo Caramelo, al comentar el art. 1º del CCCN, “Fuentes y Aplicación”, en “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Herrera – Caramelo – Picasso, Directores, T. I, pág. 6, Infojus, Ciudad de Bs. As., 2.015).

No se trata, en la especie, de un caso “civil y comercial”, sino de un asunto que cae bajo la órbita del subsistema de la seguridad social, que el régimen de riesgos del trabajo, fundamentalmente la ley de riesgos del trabajo, integra.

En materia de prescripción, concretamente, el principio anterior se verifica en lo normado en el art. 2.532 del CCCN, conforme al cual, **“cuando existe una ley especial que contiene pautas para el cómputo de los plazos de prescripción, referi-**


FERNANDO J. NAZUR
ABOGADO
M. 3428 - L° 1 - F° 402
M. FEDERAL T° 96 - F° 360
C. S. M. 250 - L° 01 - F° 07

das a la relación jurídica de la que se trate, en primer término se aplican ellas y las reglas establecidas en este Código operan solo en ausencia de previsión normativa específica” (Paola Guisado en “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Herrera – Caramelo – Picasso, Directores, T. VI, pág. 266; en la misma línea, “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético”, Jorge H. Alterini, Director, T. XI, p. 815, La Ley, Bs. As., 2.015).

2. La jurisprudencia es pacífica y conteste al respecto. Así entre otros pronunciamientos, se ha dicho que: **“Cabe rechazar el planteo de la demandada que pretende la aplicación del art. 4027, inc. 3º, del Código Civil respecto del plazo de prescripción de la acción de la D.G.R. para el cobro de impuestos, ya que la legislación sobre prescripción en materia tributaria forma parte del derecho público y se relaciona con la autonomía del poder local, por lo cual existiendo regulación específica en dicho ámbito –arts. 1º y 2º de la ley 19.489 y arts. 64 y 65 del Cód. Fiscal-ninguna preeminencia tiene la norma prevista en el Código Civil”** (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, 24.3.2004, “Ciudad de Buenos Aires c. Constructar S.A.”, La Ley Online).

Entre nosotros, la Sala 2ª de la Excm. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones de San Miguel de Tucumán, sostuvo:

“Siendo así, podemos apreciar que la normativa especial sobre prescripción, en este caso la ley 24.557, tiene preeminencia ontológica sobre la genérica - Código Civil- por ende desde esta perspectiva, en caso como el presente, corresponde la aplicación de la primera...” (sentencia n° 322, del 17.10.2011, autos “Superintendencia de Riesgos del Trabajo c. Barthaburu, Mario Leopoldo s/Apremios”).

La normativa de la LRT, incluyendo su art. 44, es de aplicación inexcusable por ser una ley de orden público que rige en la materia de autos y la especialidad de sus normas, incluyendo su art. 44 que fija el término de prescripción impuesto para reclamar el pago de sus acreencias, determina su preeminencia sobre la legislación de fondo y concretamente sobre las disposiciones del CCCN.

3. Pero si realizando una dogmática interpretación, que desvirtúe y torne inoperante el sistema de riesgos del trabajo establecido por la ley especial de la materia, se entendieran aplicables al *sub lite* las disposiciones del CCCN en materia de prescripción –hipótesis que rechazo categóricamente y planteo sólo con fines argumentativos-, los créditos de mi mandante reclamados en autos no se encontrarían prescriptos.

Adviértase, en este sentido, que la propia recurrente cita la disposición contenida en el art. 2.537 del CCCN, cuyo primer párrafo consagra la regla en materia de prescripción, cuando existe un cambio de la ley que la regula. Y al respecto, la norma consagra que **“los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior”**.

Por imperio del segundo párrafo de la misma norma (art. 2.537, CCCN), la nueva ley sólo se aplica cuando computando el plazo establecido por la ley anterior, se requiera un mayor tiempo que el que fija la ley nueva, pero contado el plazo fijado en la nueva ley desde el día de su entrada en vigencia y no desde el nacimiento de la acción para reclamar el cumplimiento de la obligación o crédito de que se trate.

En el caso de autos, considerando los períodos incluidos en el certificado de deuda en ejecución –y teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe computarse independientemente de los otros-, el más antiguo de ellos es el que corresponde a **Febrero de 2.009**. Por aplicación del inc. 2º) del art. 44 de la ley 24.557, el plazo decenal para reclamar su cobro se hubiese cumplido en **Febrero de 2.019**. A su turno, si se aplicara el plazo quinquenal máximo establecido por el Código Civil y Comercial, éste comenzaría a correr a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, esto es, el 1º de Agosto de 2.015, cumpliéndose el plazo de cinco años en **Agosto de 2.020**. Siendo así, continuaría aplicándose la ley anterior, por ser el plazo prescripción que ella fija, computado desde que comenzara a correr, el primero que finaliza (confr. **Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala I**, sentencia n° 81, del 15.3.2017; **Cámara Civil y Comercial Común, Sala II**, sentencia n° 615, del 30.10.2017). Al respecto, puede verse: **Kemelmajer de Carlucci**, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, págs. 71 y ss., Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2.015; **Jorge H. Alterini y Otros**, ob. cit., T. XI, pág. 823; **Herrera – Caramelo - Picasso**, ob. cit., T. VI, pág. 269).

E incluso reputando aplicable el plazo bienal previsto por el art. 2.562 del CCCN, que la apelante invocara al excepcionar –supuesto que también rechazo, planteándolo con meros fines argumentativos-, computándose éste a partir del 1º de Agosto de 2.015, fecha de entrada en vigencia de la nueva ley, su vencimiento habría operado el mismo día de Agosto de 2.017. De allí que habiéndose interpuesto la demanda el **5 de Julio de 2.017**, ninguno de los períodos incluidos en el certificado se encontraría prescripto, puesto que el curso de la prescripción se habría interrumpido con la interposición de la demanda **antes de su vencimiento**.

De modo que, si aún mediante una interpretación forzada e incorrecta, se entendieran aplicables al *sub lite* las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, el crédito reclamado no estaría prescripto, por haberse interpuesto la demanda, antes de cumplirse el plazo de prescripción fijado en el CCCN, computado en la forma que el mismo ordenamiento determina.

V. MANTENGO RESERVA DEL CASO FEDERAL


Para la improbable hipótesis de que se acogieran los planteos que contesto y que semejante decisión se mantuviera a lo largo de todas las instancias provinciales pertinentes, mantengo la reserva de ocurrir por la vía recursiva extraordinaria por ante el Supremo Tribunal Nacional, por involucrar la cuestión planteada en autos la aplicación e interpretación de Leyes Federales y de los principios contenidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 19 de la Constitución Nacional entre otros.

VI. PETITORIO

Por lo expuesto, a V.S. pido:

1. Tenga por contestado, en tiempo y forma, el traslado ordenado.
2. Tenga presente el mantenimiento de la reserva del caso federal.

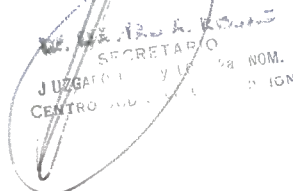
3. A la Excma. Cámara pido que, oportunamente, rechace el recurso articulado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas a la apelante.

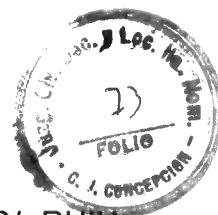

JUSTICIA
FERNANDO J. NAZUR
ABOGADO
M. 3428 - L. I - F. 402
M. FEDERAL T. 96 - F. 360
C.A.S. M. 250 - L. 01 - F. 07

JUZ.DOC.Y LOG.II

VI, 27 JUL 2018 11:35

Asunto CONT. P/ TRASLADO en OSFS



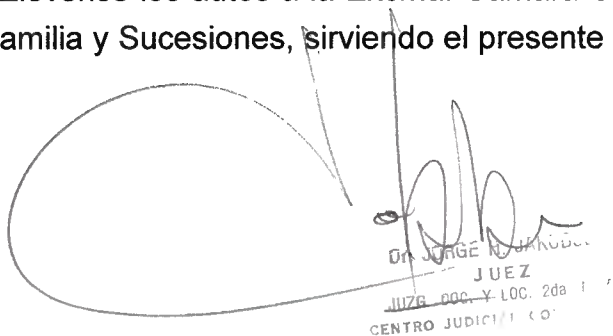


JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU
CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO Expt 552/17.-

CONCEPCION, 1 de agosto de 2018.

Téngase por contestado el traslado corrido y téngase presente la reserva formulada. Elévense los autos a la Excm. Camara Civil en Documentos y Locaciones Familia y Sucesiones, sirviendo el presente de atenta nota de estilo.-

JPV


DR. JORGE N. JARAMILLA
JUEZ
JUZG. DOC. Y LOC. 2da. Inst.
CENTRO JUDICIAL CO.

02 AGO 2018

QUEDAN NOTIFICADAS LAS PARTES

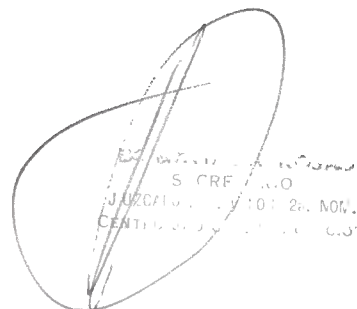
DR. JESUS A. ROJAS
SECRETARIO



JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU
CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO Expt 552/17.-

NOTA ACTUARIAL: En 10 de agosto de 2018 elevo el presente Auto a la Excma Camara Civil en Documentos y Locaciones, Familia y Sucesiones en un total de 74 fojas, con Documentación Original: Orig. de Certificado de Deuda N° 3654/2016 del 21/12/2016 en 2 fs, Orig. de Aviso de Recibo del 15/05/2014 \$ 91,00 en 1fs, con Intimación GCE N° 94468/2014 del 08/04/2014 en 4 fs. Se hace constar doble foliación fs 8 y 9, dando cumplimiento con el proveido que antecede.-

MPM



RECIBIDO Y A... HOY 10 de agosto 2018

SIENDO HORAS 11:00 en 74 fs.

Adjunta original certificado de deuda N° 3654/2016 en 2 fs; original Aviso de recibo de fecha 15/05/14 por \$91,00; Intimación GCE N° 94468/2014 de fecha 8/4/14 en 4 fs.-

Dña. María Antonia...
Excmo...
CENTRO...

PODER JUDICIAL TUCUMAN

JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO. EXPTE. N° 552/17.--

En 15 de agosto de 2018 presento a despacho informando a V.S. que no se encuentran notificados por derecho propio los letrados Fernando J. Nazur y Enrique E. Kaenel, de la Resolución de fecha 06/06/2018, que regulan sus honorarios profesionales. Secretaria

Dr. Maria Amalia Benítez
SECRETARIA CAT. A
Exma. Cam. C. Doc. Loc. Fam. y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

CONCEPCIÓN 15 de agosto de 2018.-

Téngase presente lo informado por la Actuaría. Vuelvan los presentes autos a su origen a los fines de que se notifiquen los letrados Fernando J. Nazur y Enrique E. Kaenel, ambos por derecho propio de la Resolución de fecha 06/06/2018 que regula sus honorarios profesionales. NAV

Dr. Roberto Pantana Alvarado
V. C. P. A. L.
SALA I
Exma. Cam. C. Doc. Loc. Fam. y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

**JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU CARMEN
TERESA S/ COBRO EJECUTIVO.- EXPTE. N° 552/17.-**

NOTA ACTUARIAL: En 16 de agosto de 2018, remito al Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la 2° Nominación de este Centro Judicial Concepción, los presentes autos en 1 Cuerpo, con un total de 76 fojas, conforme lo ordenado en Providencia de fecha 15/08/2018, adjuntando la siguiente documentación que a continuación se detalla: original certificado de deuda N° 3654/2016 en 2 fs.; original aviso de recibo de fecha 15/05/14 por \$91,00; intimación GCE N° 94468/2014 de fecha 8/4/14 en 4 fs. MET.-

[Firma]
Dra Maria Amalia Barrionuevo
SECRETARIA CAT. A
Excmo. Cam. C. Doc. Loc. Fam y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

JUL 16 AGO 2018 11:22

JUZ.DOC.Y LOC.II

*Recibo autos en 1 cuerpo de 76 fs.
con solo con la docum. original
aviso detallado y numerado.*

[Firma]
DR. MARÍA A. NOJAS
SECRETARIO
JUZGADO DOC. Y LOC. 2a. NOM.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

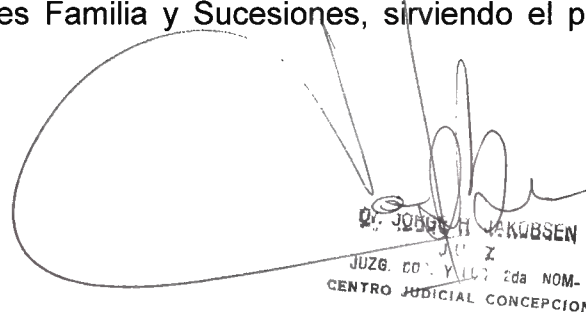
JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU
CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO Expt 552/17.-

CONCEPCIÓN, 17 de agosto de 2018.

Atento a lo ordenado por la Excma Cámara del Fuero,
notifíquese a los letrados Fernando J. Nazur y Enrique Kaenel por derecho
propio de la Resolución de fecha 06/06/2018 (fs. 57/59).

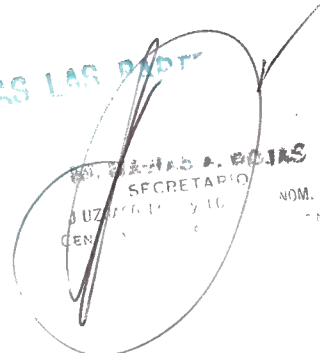
Fecho: Elévense los autos a la Excma. Cámara Civil en
Documentos y Locaciones Familia y Sucesiones, sirviendo el presente de
atenta nota de estilo.-

JPV


DR. JOSEPH H. JAKOBSEN
JUZG. CO. Y LL. 2da NOM-
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

21 AGO 2018

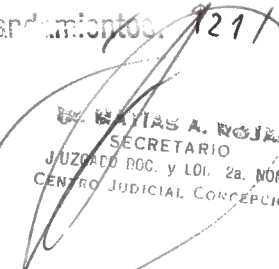
QUEDAN NOTIFICADAS LAS PARTES


DR. CARLOS A. ROJAS
SECRETARIO
JUZG. CO. Y LL. 2da NOM-
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

C
W
1

2

En 22 AGO 2018 Se libran: Cédulas / Cédulos / Mandamientos. 121/122


E. MAYAS A. NOJAS
SECRETARIO
JUZGADO DOC. y LOI. 2a. NOM.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN



CEDULA DE NOTIFICACION

JUZGADO DE DOCUMENTOS Y LOCACIONES SEGUNDA NOM.

Concepción 22 de agosto de 2018

CEDULA N° 921

AUTOS: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU
CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO. Expte N°: 552/17

Se notifica: AL DR. FERNANDO NAZUR Y POR DERECHO PROPIO.-
Domicilio: CASILLERO N° 459.-

PROVEIDO



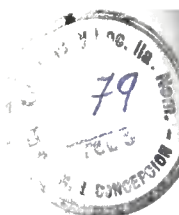
CONCEPCION, 06 de JUNIO de 2018.- **A U T O S Y V I S T O S... C O N S I D E R A N D O... R E S U E L V O: I°).**- NO HACER LUGAR a la Excepción de Prescripción deducida por CARMEN TERESA RUIU, demandada en autos, a fs.5/7.- **II°).**- **ORDENAR** llevar adelante la presente ejecución seguida por **SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO**, en contra del Sra. **RUIU CARMEN TERESA**, DNI N° 12.295.300, hasta hacerse la parte acreedora integro pago del capital reclamado de \$ **12.931,37** (PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO con 37/100), con mas costas e intereses que se calculan con la tasa de interés activa publicada por el B.N.R.A., conforme fallo de la Excm. Cámara Civil en Documentos y Locaciones del Centro Judicial de Concepción, en los autos caratulados: "Villafañe de Lobo, Susana del Valle Vs. Abdala Héctor Eduardo S/ Cobro Ejecutivo". Expte. N° 1080/12, Sentencia n° 15, fecha: 03/03/2015, desde que la suma es debida hasta el día de su efectivo pago.- **III°).**- **COSTAS**, gastos y aportes Ley 6059, a cargo del accionado.- **IV°).**- **REGULAR HONORARIOS** al letrado FERNANDO J. NAZUR, en la suma de \$8.500, conforme lo considerado.- **V°).**- **REGULAR HONORARIOS** al letrado ENRIQUE E. KAENEL, en la suma de \$8.500, conforme lo considerado.- **IV°).**- **COMUNÍQUESE** a la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán.- **HÁGASE SABER.** Fdo: JORGE H. JAKOBSEN "Juez". - ANTE MI - DR. MATIAS ALFREDO ROJAS. - SECRETARIO. - **QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.** - MPM



459
SECRETARIO
JUZGADO DOC. y LOC. 2a NOM.
CENTRO JUDICIAL C/

JUZ.DOC.Y LOC.II
VI. 24 AGO 2018 10:18

DR. MARIALA A. ROSAS
SECRETARIO
JUZ.DOC. Y LOC. 2a. NOM.
DE JUDICIAL CONCEPCION



PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN

CEDULA DE NOTIFICACION
JUZGADO DE DOCUMENTOS Y LOCACIONES SEGUNDA NOM.

Concepción 22 de agosto de 2018

CEDULA N° 922

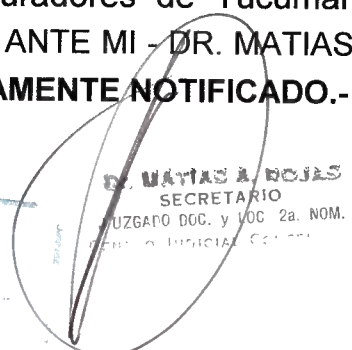
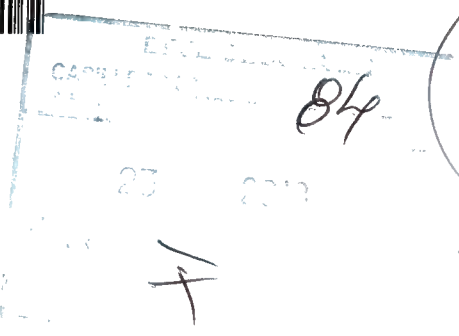
AUTOS: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU
CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO. Expte N°: 552/17

Se notifica: AL DR. KAENEL ENRIQUE E. Y POR DERECHO PROPIO.-
Domicilio: CASILLERO N° 84



PROVEIDO

CONCEPCION, 06 de JUNIO de 2018.- **A U T O S Y V I S T O S... C O N S I D E R A N D O... R E S U E L V O:** I°).- **NO HACER LUGAR** a la Excepción de Prescripción deducida por CARMEN TERESA RUIU, demandada en autos, a fs.5/7.- II°).- **ORDENAR** llevar adelante la presente ejecución seguida por **SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO**, en contra del Sra. **RUIU CARMEN TERESA**, DNI N° 12.295.300, hasta hacerse la parte acreedora integro pago del capital reclamado de \$ **12.931,37** (PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO con 37/100), con mas costas e intereses que se calculan con la tasa de interés activa publicada por el B.N.R.A., conforme fallo de la Excm. Cámara Civil en Documentos y Locaciones del Centro Judicial de Concepción, en los autos caratulados: "Villafañe de Lobo, Susana del Valle Vs. Abdala Héctor Eduardo S/ Cobro Ejecutivo". Expte. N° 1080/12, Sentencia n° 15, fecha: 03/03/2015, desde que la suma es debida hasta el día de su efectivo pago.- III°).- **COSTAS**, gastos y aportes Ley 6059, a cargo del accionado.- IV°).- **REGULAR HONORARIOS** al letrado FERNADO J. NAZUR, en la suma de \$8.500, conforme lo considerado.- V°).- **REGULAR HONORARIOS** al letrado ENRIQUE E. KAENEL, en la suma de \$8.500, conforme lo considerado.- IV°).- **COMUNÍQUESE** a la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán.- **HÁGASE SABER.** Fdo: JORGE H. JAKOBSEN "Juez". - ANTE MI - DR. MATIAS ALFREDO ROJAS. - SECRETARIO.- **QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.** - MPM



579

JUZ.DOC.Y LOC.II

VI. 24 AGO 2018 10:13

Dr. CARLOS A. ROJAS
SECRETARIO
JUZGADO DOC. y LOC. 2a. NOM.
Tribunal Judicial CONCEPCION



JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU
CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO Expt 552/17.-

NOTA ACTUARIAL: En 6 de septiembre de 2018 elevo el presente Auto a la Excmá Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Familia y Sucesiones en un total de 80 fojas, con Documentación Original: Orig. de Certificado de Deuda N° 3654/2016 del 21/12/2016 en 2 fs, Orig. de Aviso de Recibo del 15/05/2014 \$ 91,00 en 1fs, con Intimación GCE N° 94468/2014 del 08/04/2014 en 4 fs. Se hace constar doble foliación fs 8 y 9, dando cumplimiento con el proveído que antecede.-

MPM

Dr. ~~MARTÍN A. ROJAS~~
SECRETARIO
J. J. P. P. C. y LOC. 2º. NOM.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

RECIBIDO Y A DESPACHO HOY 06 SEP 2018

SIENDO HORAS 12:30 en 80 fs.
Adjunta original certificado de Deuda N° 3654/2016 de fecha 21/12/2016 en 2 fs; original Aviso de Recibo de fecha 15/05/14 por \$ 91,00; intimación GCE N° 94468/2014 de fecha 8/4/2014 en 4 fs.-

Dr. María Amalia Barrionuevo
SECRETARIA CAT. A
Excmá. Cam. C. Doc. Loc. Fam. y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

PODER JUDICIAL TUCUMAN

JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO. EXPTE. N° 552/17.--

Informo a V.S. que la Dra. Elda Aguilar de Larry, se encuentra de licencia prolongada por enfermedad. Secretaría 7 de septiembre de 2018.-

Dra. María Amalia Barriónuevo
SECRETARIA CAT. A
Exma. Cam. C. Doc. Loc. Fam. y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

CONCEPCIÓN 7 de septiembre de 2018.-

Téngase presente lo informado por Secretaría.

Encontrándose en uso de licencia prolongado por enfermedad la Dra. Elda Aguilar de Larry, Vocal de la Sala en Documentos y Locaciones: en virtud de lo previsto por el art. 49 de la Ley Orgánica de Tribunales y dispuesto por Acordada 367/00, designase para integrar Tribunal a la Dra. María Cecilia Menendez, Vocal de la Sala de Familia y Sucesiones.

Resérvese en Caja Fuerte de Secretaria la documentación original acompañada. Al Recurso de Apelación concedido el 18/06/2018 (fojas 64): Autos para sentencia (Art. 734 Procesal). Concurran las partes diariamente para notificaciones en Secretaría. Personal. NAV

Dr. Roberto R. Santana Alvarado
VOCAL
SALA EN DOC. LOC.
Exma. Cam. Div. Loc. y Loc. Fam. y Suc.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

**JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU
CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO.- EXPTE. N° 552/17.-**

NOTA ACTUARIAL: En fecha 10 de septiembre de 2018, notifico a la DRA. MARIA CECILIA MENENDEZ, Vocal de la Sala de Familia y Sucesiones, de la providencia de fecha 07/09/2018.-MET

Dra. Maria Cecilia Menendez
VOCAL
SALA EN FAMILIA Y SUCES.
Excm. Cam. Civ. Doc. y L. Fam. y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

Dra. Maria Amparo Barrionuevo
SECRETARIA CAT. A
Excm. Cam. C. Doc. Loc. Fam. y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

En fecha 11/9/18 se libra cédulas N° 484 y N° 485.-

Dra. Maria Amparo Barrionuevo
SECRETARIA CAT. A
Excm. Cam. C. Doc. Loc. Fam. y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION



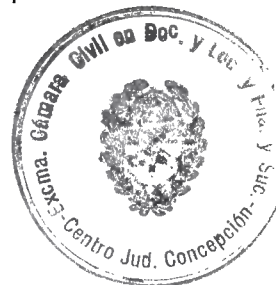
HABILITADO PARA ACTUAR

Concepción, 11 de septiembre de 2018.-

CEDULA N°: 484

.-

EXpte N°: 552/17.-



**EXCMA. CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES Y
FAMILIA Y SUCESIONES**

SALA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES

AUTOS: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU CARMEN
TERESA S/ COBRO EJECUTIVO.-

Se notifica al: letrado FERNANDO NAZUR, Apoderado de la parte Actora.-

Domicilio: CASILLERO N° 459.-
el siguiente

PROVEIDO:

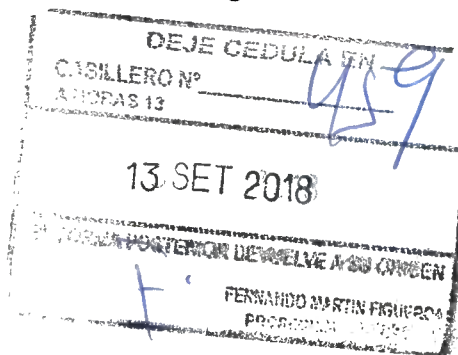
CONCEPCIÓN 7 de septiembre de 2018.- Téngase presente lo informado por Secretaría. Encontrándose en uso de licencia prolongado por enfermedad la Dra. Elda Aguilar de Larry, Vocal de la Sala en Documentos y Locaciones: en virtud de lo previsto por el art. 49 de la Ley Orgánica de Tribunales y dispuesto por Acordada 367/00, designase para integrar Tribunal a la Dra. María Cecilia Menendez, Vocal de la Sala de Familia y Sucesiones. Resérvese en Caja Fuerte de Secretaria la documentación original acompañada. Al Recurso de Apelación concedido el 18/06/2018 (fojas 64): Autos para sentencia (Art. 734 Procesal). Concurran las partes diariamente para notificaciones en Secretaria. Personal. Fdo. DR. ROBERTO R. SANTANA ALVARADO - VOCAL - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. MET

D.a María Amalia Barrionuevo
SECRETARIA CAT. A
Excma. Cam. C. Doc. Loc. Fam. y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

A horas del día se dejó cedula en la casilla numero:
..... y se devolvió el original a Secretaría de origen.-

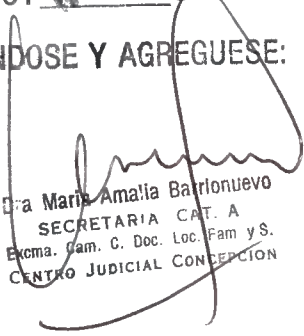


MET



Jefe de Mesa de Entradas

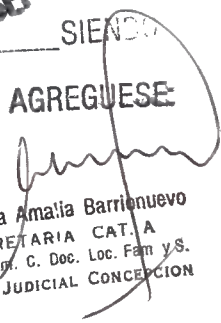
RECIBIDO Y A DESPACHO HOY 14 SEP 2018 SIENDO
HORAS 9:35 ADJUNTANDOSE Y AGREGUESE:

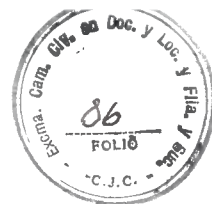

Dra. María Amalia Barrionuevo
SECRETARIA CAT. A
Excmo. Jm. C. Doc. Loc. Fam y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

Jefe de Mesa de Entradas

26/9


RECIBIDO Y A DESPACHO HOY 14 SEP 2018 SIENDO
HORAS 9:35 ADJUNTANDOSE Y AGREGUESE


D.a Maria Amalia Barriounevo
SECRETARIA CAT. A
Excmo. Cant. C. Doc. Loc. Fam y S.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION



**JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU CARMEN
TERESA S/ COBRO EJECUTIVO. Expte N°552/17.**

En 26 de septiembre de 2018 presento los autos a Despacho para resolver en 85
fs. al Sr. Vocal Dr. Roberto Ramón Santana Alvarado.-SMAG


NESTOR ALEJANDRO VARELA
PRO SEC.
Excmo. Cámara Civil, de lo Contencioso y Laboral
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN

**JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU CARMEN
TERESA S/ COBRO EJECUTIVO. EXPTE. N° 552/17.**

NOTA ACTUARIAL: En 18 de octubre de 2018 devuelve los presentes autos con un total de 86 fojas y Voto, el Sr. Vocal Preopinante DR. ROBERTO R. SANTANA ALVARADO, y paso los mismos a la DRA. MARIA CECILIA MENENDEZ, en 87 fojas, Adjuntando voto en 2 fojas. NAV

MARIA CECILIA MENENDEZ
EXTE. 1000
CENTRO DE INVESTIGACION

CÁMARA DE APELAC. EN LO CIVIL EN DOC. Y LOC. Y FLIA. Y SUC.	
CENTRO JUDICIAL DE CONCEPCIÓN	
REGISTRADO	
SENTENCIA	TOMO
Nº 86	Nº 2018

**JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO C/ RUIU CARMEN TERESA S/
COBRO EJECUTIVO EXPTE Nº 552/17.**
Ingresó el 06/09/2018. (Juzgado de Doc. y
Loc. de la IIª Nom. - C.J.C.).



CONCEPCION, 23 de octubre de 2018.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en estos autos caratulados: "SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO. EXPTE. Nº 552/17"; y

CONSIDERANDO:

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de Apelación deducido a fs. 63 por la demandada Carmen Teresa Ruiiu, con el patrocinio del letrado Enrique Kaenel, en contra de la sentencia de fecha 06 de junio de 2018 (fs. 57/59 y vlta.), dictada por el Sr. Juez Civil en Documentos y Locaciones de la Segunda Nominación de este Centro Judicial Concepción.

Por proveído del 18/06/2018 de fs. 64 se concede en relación el recurso de apelación interpuesto (art. 710 CPCCT), presentando memorial de agravios la parte recurrente a fs. 67 y vlta.

Expresa que la sentencia de primera instancia se fundamenta en la primera parte del artículo 2532 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), y se equivoca. Que por ser ley posterior a la citada en el fallo prima el CCyCN, cuyo artículo 2560 dispone que el plazo genérico (y máximo) es de cinco años.

Dice que la interpretación efectuada en la sentencia de la norma jurídica aplicable al caso, encuentra su valladar en el art. 2357 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual transcribe.

Refiere que las legislaciones podrán establecer períodos de prescripción diferentes a la legislada en el orden nacional, excepción que rige para futuro, por normas posteriores a la fecha de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación.

Indica que igualmente la legislación especial, para aplicar prescripciones diferentes, debe promulgar la ley respectiva. Mientras no lo haga, la prescripción liberatoria opera a los cinco años.

Que por ello debe revocarse la resolución impugnada, haciéndose lugar a la defensa de prescripción, con costas. Ello así, por cuanto conforme///

///monocorde jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos los aspectos del instituto de la prescripción deben regirse por las disposiciones del CCyCN, conforme artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.

Corrido traslado, a fs. 70/72 y vlt. contesta el memorial el letrado Fernando J. Nazur, en su carácter de apoderado de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, solicitando el rechazo del recurso interpuesto. En relación con la carga impuesta por el artículo 717 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (CPCCT), pone de resalto que la expresión de agravios de la recurrente no contiene la crítica concreta y razonada de los puntos de la sentencia que estima afectan sus derechos, por lo que pide se declare desierto el recurso. Sin perjuicio de ello, en esencia, manifiesta que la ley de Riesgos del Trabajo 24.557 no ha sido derogada ni por el Código Civil y Comercial ni por ningún otro texto legal, ni en forma expresa ni implícitamente. Que se trata en la especie de un asunto que cae bajo la órbita del subsistema de la seguridad social, que el régimen de riesgos del trabajo, fundamentalmente la ley de riesgos del trabajo, integra. Que la normativa de la LRT es de aplicación inexcusable por ser de una ley de orden público que rige en materia de autos y la especialidad de sus normas, incluyendo su artículo 44 que fija el término de prescripción impuesto para reclamar el pago de sus acreencias, determina su preeminencia sobre la legislación de fondo y concretamente sobre las disposiciones del CCyCN. Pide costas.

Por proveído de fs. 73 se dispone la remisión de los autos a esta instancia de Alzada.

Recibidas las actuaciones, a fs. 81 se llaman autos para sentencia y se integra Tribunal con la Dra. María Cecilia Menéndez, Vocal de la Sala de Familia y Sucesiones, providencia que se encuentra consentida por las partes.

Antes de introducirnos a la consideración de los fundamentos del recurso impetrado, corresponde examinar inicialmente si la presentación en que se materializa dicho remedio procesal cumple con todas las formalidades legales respectivas, cuestión que amerita su estudio aún de oficio por el juzgador por tratarse de un requisito intrínseco de admisibilidad de la pretensión procesal, cuyo análisis resulta previo al de su fundabilidad.

Es sabido que la función de la alzada está restringida por el alcance del recurso concedido y por la fundamentación del quejoso, que determinan el ámbito de su competencia decisoria, más no caben dudas de que ese principio general cede en ciertas circunstancias, pues pese a que el tribunal sólo debe actuar dentro de los carriles del recurso, la apelación sobre el fondo no le impide revisar los presupuestos procesales. Ello así aunque el vencedor nada diga, y aún cuando el inferior haya concedido dicho medio, pues en definitiva el juez del recurso es el superior, quien no queda vinculado sobre el pronunciamiento de admisibilidad que haya cumplido el A quo (cfr. Hitters, Juan Carlos "Recursos Ordinarios", Editora///

JUICIO: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ RUIU CARMEN TERESA S/ COBRO EJECUTIVO. EXPTE. N° 552/17.

///Platense, La Plata, 1.998, pág. 394). En ese sentido se ha dicho que la primera misión de la alzada es considerar la admisibilidad del recurso concedido por el Juez a quo: examinar si la resolución es apelable, si el quejoso tiene calidad de parte legítima, así como también si lo ha deducido en tiempo. Este examen es oficioso y reviste carácter previo respecto de la fundabilidad del recurso (Fenochietto - Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Buenos Aires, 1.983, t. 1, pág. 849). No estando obligado el tribunal de alzada por la decisión del juez apelado, en relación a la admisibilidad del recurso de apelación. (CSJT., Sentencia N° 357, de fecha 21/05/1999).

Al respecto sostiene Alsina que "(...) teniendo los preceptos que reglamentan los recursos el carácter de orden público, el tribunal de segunda instancia se encuentra habilitado para examinar si el apelante tiene calidad de parte, si tiene interés en la interposición del recurso, si este ha sido interpuesto en término, si la providencia es recurrible, etc., en caso contrario podrá declararse de oficio mal concedido el recurso y ordenar la devolución de los autos al inferior (Alsina, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Tomo II, página 677). En sentido coincidente Palacio: "(...) la admisibilidad es objeto de un doble examen, originariamente efectuado por el órgano que dictó la resolución recurrida y posteriormente revisado por el órgano superior (...)" (Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", Tomo V, parágrafo 526-d, pág. 43).

Sobre esa base, se advierte que el recurso de apelación concedido en el sub lite mediante providencia de fs. 64, fue interpuesto a fs. 63 mediante un escrito firmado por el letrado patrocinante de la parte demandada, Dr. Enrique E. Kaenel, más no por la propia parte accionada.

En este proceso se demanda a la Sra. Carmen Teresa Ruiiu, quien ha comparecido por sí, con el patrocinio letrado del Dr. Kaenel. En estas condiciones se ha apersonado y opuesto a la ejecución impetrada la defensa de prescripción (fs. 29 y vta.).

No obstante, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 06/06/2018 (fs. 57/59 y vta.) no ha sido firmado por la demandada, sino sólo por el letrado que venía patrocinándola; y no existe en autos constancia de poder para juicios conferido por la Sra. Ruiiu a favor del Dr. Kaenel, ni se ha invocado el supuesto previsto por el artículo 62 (personería de urgencia) del Código Procesal Civil y comercial de la Provincia (CPCCT).

De ahí, que el letrado patrocinante no tenía legitimación para apelar por la demandada (doctrina de los artículos 59 y 125 del CPCCT).

En efecto, el presentante debe manifestar en que carácter actúa, si lo hace por un derecho que le pertenece (por derecho propio), o lo hace por un derecho perteneciente a otra persona (por representación). En éste último caso, conforme lo exige la ley, es esencial la existencia del acto de apoderamiento, pues fuera del mismo el abogado no puede actuar por la parte, porque carece de legitimación "ad causam" y "ad processum" (cfr. Falcón, Enrique, en DJ, 1995-II, 12219).

Así ello, la exigencia de que la parte firme el escrito judicial no puede ser reemplazada por la firma del letrado patrocinante. Es que la suscripción por el letrado patrocinante no es suficiente, aún cuando la parte interesada ratifique ulteriormente la presentación (Palacio - Alvarado Velloso, Código Procesal Anotado, T IV, pág. 48) (Ésta Sala, Sentencia N° 91 del 11/10/2012).

En ésta dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que constituye un acto jurídico inexistente el escrito firmado únicamente por el letrado patrocinante del interesado, quien no ha invocado poder para representar a su parte, ni razones de urgencia que hagan aplicable el art. 48 del C.P.C.N. (cfr. CSJN., "Farías Bonasea S.R.L. c/ Delis Gigen", 23/08/88).

En consecuencia, el escrito en cuestión (de interposición del recurso) al carecer de uno de los requisitos indispensables para su validez, cual es la firma de la parte -en el caso la demandada-, resulta inexistente y, por ende, insusceptible de producir efecto jurídico alguno, por lo que corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 63, contra la sentencia de primera instancia de fecha 06 de junio de 2018, que glosa a fs. 57/59 y vlt. de autos.

En cuanto a las costas de esta instancia, atento al resultado arribado, se imponen la misma a la apelante, por ser de ley expresa (art. 107 CPCCT.)

Así, se

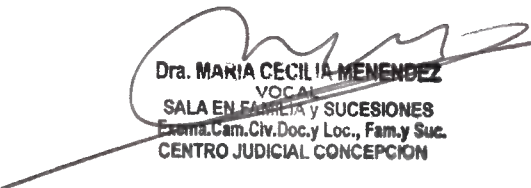
RESUELVE:


I°) **DECLARAR MAL CONCEDIDO** el recurso de apelación interpuesto a fs. 63, contra la sentencia de primera instancia de fecha 06 de junio de 2018, que glosa a fs. 57/59 y vlt. de autos, conforme a lo considerado.

II°) **COSTAS:** A la apelante, según se considera.

III°) **HONORARIOS:** Oportunamente.

HÁGASE SABER.


Dra. MARIA CECILIA MENÉNDEZ
VOCAL
SALA EN FAMILIA y SUCESIONES
Exma. Cam. Civ. Doc. y Loc., Fam. y Suc.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION


Sr. Roberto R. Santana Alvarado
VOCAL
SALA EN DOC. LOC.
Exma. Cam. Civ. Doc. y Loc. Fam. y Suc.
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION